VISTO:

El proceso virtual N° 00 y el expediente N° 00 y otros del sumario administrativo instruido al contribuyente **NN** con **RUC 00**, en adelante **NN**, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Orden de Fiscalización N° 00 notificada el 08/05/2018 y ampliada en cuanto al plazo y alcance mediante las RP N° 00 y N° 00 respectivamente, a través de la Dirección General de Grandes Contribuyentes (**DGGC**), la SET dispuso el control de las obligaciones del IVA General de los periodos fiscales de 07/2013 a 06/2016 y el IRAGRO Régimen Contable de los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016 de **NN**, y para tal efecto le requirió que presente sus libros impositivos y los documentos que respaldan las compras que declaró de los proveedores: **XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX**, lo cual no fue cumplido.

El control cuenta como antecedentes a los informes SET/IT N° 00/2016, N° 00/2017, N° 00/2017 y DPO N° 00/2018 mediante los cuales los Departamento de Investigación Tributaria y de Planeamiento Operativo informaron que detectaron un aparente esquema de supuestos proveedores domiciliados en la frontera de Canindeyu, inscriptos como contribuyentes con el objeto de proveer facturas a varias firmas con el fin de hacer valer el monto de dichos comprobantes como crédito fiscal y como costos y gastos para el IRACIS, en perjuicio del Fisco. Personas físicas que además, no contaban con la infraestructura para proveer los bienes individualizados en las facturas, y tenían en común que ninguno de ellos residía en los domicilios declarados en el RUC y los lugareños tampoco los conocen, incluso uno de ellos al momento de la expedición de las facturas ya había fallecido; entre los clientes que habrían utilizado sus facturas se encuentra **NN**.

Durante la fiscalización, los auditores de la SET constataron que **NN** utilizó como respaldo de sus créditos fiscales en el IVA General y de sus costos en el IRAGRO Régimen Contable montos de compras relacionadas a operaciones que no realizó con los proveedores: **XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX**, porque **NN** incluyó sus comprobantes en los libros de compras del IVA que presentó a la SET a través del módulo Hechauka del Sistema Marangatu. En atención a que ninguno de estos supuestos proveedores fue ubicado en los domicilios declarados en el RUC, los vecinos del lugar no los conocían ni observaron la existencia de locales comerciales, los auditores de la SET concluyeron que estas operaciones no existieron, al igual que las operaciones **XX** y **XX**, la primera negó haberse inscripto en el RUC en tanto que el segundo tampoco fue ubicado en el domicilio declarado en el RUC, por lo que procedieron a la impugnación de esos valores y reliquidaron los tributos, de lo cual surgieron saldos a favor del Fisco.

Dadas estas circunstancias, los auditores de la SET sugirieron calificar la conducta de **NN** como defraudación, conforme a lo dispuesto en el Art. 172 de la Ley N° 125/1991 (la Ley) y la aplicación de la multa del 140% sobre el impuesto de las facturas cuestionadas, de acuerdo a las circunstancias agravantes y atenuantes previstas en el Art. 175 de la Ley; todo ello según siguiente detalle:

OBLIGACIÓN	PERIODO/ EJERCICIO FISCAL	IMPUESTO A INGRESAR S/ RELIQUIDACIÓN	MONTO IMPONIBLE DE LAS FACTURAS CUESTIONADAS	IMPUESTO DE LAS FACTURAS CUESTIONADAS	MULTA 140% S/ IMPUESTO DEFRAUDADO	TOTAL A INGRESAR G
521 - AJUSTE IVA	feb-14	7.069.002	111.867.955	11.186.796	15.661.514	22.730.516
521 - AJUSTE IVA	mar-14	0	756.743.182	75.674.318	105.944.045	105.944.045
521 - AJUSTE IVA	may-14	0	1.174.981.783	117.498.178	164.497.450	164.497.450
521 - AJUSTE IVA	jun-14	0	1.506.356.539	150.635.654	210.889.915	210.889.915
521 - AJUSTE IVA	ene-16	0	606.065.232	60.606.523	84.849.132	84.849.132
521 - AJUSTE IVA	feb-16	0	570.806.226	57.080.623	79.912.872	79.912.872
521 - AJUSTE IVA	mar-16	0	768.976.227	76.897.623	107.656.672	107.656.672
521 - AJUSTE IVA	abr-16	0	574.467.095	57.446.710	80.425.393	80.425.393
521 - AJUSTE IVA	may-16	0	639.379.273	63.937.927	89.513.098	89.513.098
521 - AJUSTE IVA	jun-16	0	476.642.310	47.664.231	66.729.923	66.729.923
516 - AJUSTE IRAGRO	2014	362.551.409	3.625.514.092	362.551.409	507.571.973	870.123.382
516 - AJUSTE IRAGRO	2016	363.633.636	3.636.336.363	363.633.636	509.087.091	872.720.727
TOTAL		733.254.047	14.448.136.277	1.444.813.628	2.022.739.079	2.755.993.126

A fin de precautar las Garantías Constitucionales de la Defensa y el Debido Proceso por Resolución de Instrucción N° 00 del 19/11/2018, el Departamento de Sumarios y Recursos 2 (**DSR2**) dispuso la instrucción del sumario administrativo, conforme lo disponen los artículos 212 y 225 de la Ley y la RG N° 114/2017, que prevén los procedimientos para la determinación tributaria y para la aplicación de sanciones.

Los descargos fueron presentados, por lo que luego de haber practicado todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, se llamó a autos para resolver.

Las argumentaciones expuestas por **NN**, así como todos los antecedentes agregados en el sumario fueron analizados por el **DSR2**, conforme se expone a continuación:

Respecto al plazo de la fiscalización, **NN** alegó que *"...la orden de fiscalización puntual fue notificada en fecha 08/05/2019 y culminaron extemporáneamente conforme consta en el Acta Final N° 00 de fecha 12/10/18, debiendo concluir dentro del plazo que se cumplió el día lunes 17/09/2018..., no ocurrió así sino el 12/10/2018, o sea, extemporáneamente"*.

Al respecto, el **DSR2** concluyó que no existió el exceso alegado por **NN**, pues tal y como el propio contribuyente manifestó, la fiscalización se inició el día siguiente de la notificación de la Orden de Fiscalización ocurrida el 08/05/2018, y desde esa fecha hasta la firma del Acta Final ocurrida el 12/10/2018, considerando la ampliación del plazo por otros 45 días hábiles más mediante la RP N° 00, así como la suspensión de los plazos de los procesos de fiscalización desde el 29/05/2018 hasta el 05/06/2018 dispuesta en el Art. 5° de la RG N° 129/2018 *"Por la cual se dispone la implementación y puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de Gestión Tributaria Marangatu 2.0 y se dictan medidas administrativas para este efecto"*, así como la suspensión del plazo otorgada de 20 días a pedido del propio contribuyente en el marco de lo dispuesto en la RG N° 25/2014, transcurrieron exactamente 81 días, cumpliéndose estrictamente lo estipulado en el inciso b) del Art. 31 de la Ley 2.421/2004 y la RG N° 4/2008.

NN solicitó la nulidad de la instrucción del sumario administrativo alegando que la misma no fue dispuesta por la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria sino por la DGGC y que la resolución de instrucción fue dictada por una funcionaria *"... con el agravante de que la designación de la sumariante lo dispuso la Dirección del Departamento de Sumarios Recursos 2, violando así lo establecido por el ya mencionado Art. 4 de la RG N° 114/17... la resolución de instrucción de sumario fue dispuesta por dependencia o persona no autorizada, con lo cual se ha violentado formalmente el principio de legalidad"*.

El **DSR2** señaló que la SET se encuentra expresamente autorizada por el Art. 186 de la Ley a fijar normas generales para trámites administrativos, impartir instrucciones, y dictar los actos necesarios para la aplicación, administración, percepción y fiscalización de tributos. Prosigue dicho artículo señalando que las normas dictadas en aplicación de lo mencionado se subordinarán a las leyes y reglamentos y serán de observancia obligatoria para todos los funcionarios y para aquellos obligados que las hayan consentido expresa o tácitamente, o que hayan agotado con resultado adverso las vías impugnativas pertinentes.

En ese sentido, el **DSR2** aclaró que Art. 4° de la RG N° 114/2017 dispone que *"Recibido el Informe Final de denuncia y los antecedentes en la DPTT, esta dependencia dispondrá la instrucción del Sumario Administrativo y designará al Sumariante"*, que en concordancia con el literal k) del Art. 1° de la misma norma, establece que el Sumariante es *"El personal de la SET designado para llevar adelante el Sumario Administrativo"*.

Igualmente, el Art. 252 de la Ley consagra la Teoría del Órgano al indicar que en cuanto la ley aluda a la Administración Tributaria deberá ser entendida que se refiere a la SET como institución, por lo que al referirse la norma a la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria (**DPTT**), independientemente de las personas quienes mediante su gestión realizan los actos preparativos de la determinación tributaria, debe ser entendida como institución.

El **DSR2** aclaró también, que la **DGGC** en ningún momento dispuso la instrucción del sumario administrativo, pues simplemente se limitó a remitir los antecedentes a fin de proseguir con lo dispuesto en los artículos 212 y 225 de la Ley, como claramente se expuso en la providencia del 05/11/2018. Por tanto, el **DSR2** concluyó que la resolución de instrucción cumple con los requisitos de validez relativa a la competencia.

Por lo demás, la nulidad alegada por **NN**, debe fundarse en una irregularidad o arbitrariedad de tal magnitud, que su simple ocurrencia produzca algún daño o indefensión a la parte quien dice haberse agraviado por este hecho, lo cual en este caso no ocurrió, pues **NN** no presentó elemento alguno que demuestre la indefensión alegada.

En cuanto a la cuestión de fondo, **NN** alegó que *"Por deficiencia de la SET es que los contribuyentes desaparecen del ámbito de control de la Administración y para ubicarlos su personal debe, como en nuestro caso, dedicarse a una bochornosa y lamentable caza persecutoria para intentar entrevistarlos en un procedimiento no previsto en la ley, desechando las regulaciones pertinentes a fin de recibir la confesión de que no han confeccionado las facturas investigadas"*. Agregó que *"... el adquirente de bienes y servicios no puede estar investigando la legitimidad de dicha documentación al momento de su compra cuando dicho comercio está documentado con facturas legales debidamente timbradas... las entrevistas como las realizadas por la administración no pueden probar realidades económicas relacionadas con las emisiones de facturas"*.

El **DSR2** concluyó que **NN** declaró como respaldo de sus créditos fiscales en el IVA y como costos en el IRAGRO Régimen Contables montos de facturas relacionadas a operaciones de compras que no son reales en infracción a lo dispuesto en los artículos 38 y 86 de la Ley y el Art. 32 de la Ley N° 5.061/2013, pues consignó dichos valores en sus libros de compras del IVA y en el Diario que proveyó a la SET. Concluyó además, que resulta materialmente imposible que los supuestos proveedores: **XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX Y XX** hayan realizado las ventas que **NN** declaró a su favor, pues estos no cuentan con la mínima infraestructura para ello.

El **DSR2** llegó a estas conclusiones con base a los elementos que se explican a continuación:

Respecto a los proveedores: **XX, XX, XX, XX, XX y XX**, a pesar de todas las diligencias efectuadas por los auditores de la SET, no fueron ubicados en los domicilios declarados en el RUC y los vecinos de dichos lugares no los conocen ni existen locales comerciales ni depósitos en los que pueda almacenar las mercaderías o las máquinas y vehículos supuestamente utilizados para la prestación de los servicios que **NN** hizo valer ante la SET, tales como servicios de flete, prestación de servicios de maquinarias, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, etc. (fs. 00 del Exp. N° 00).

En cuanto al supuesto proveedor **XX**, en la entrevista que le realizaron los auditores de la SET, este aseveró que no se inscribió en el RUC, que no se dedica al comercio y que no realizó operaciones de venta a **NN** y que solo se dedica al cuidado de una granja, propiedad de un vecino (fs. 00/165 del Exp. N° 00).

Asimismo, se solicitó informaciones a las imprentas en las que se confeccionaron los comprobantes utilizados por **NN**, y en ese sentido, el Sr. **XX**, propietario de la imprenta **XX**, mediante los Exp. N° 00, 00, 00, 00, 00 remitió a la SET los documentos de autorización de timbrado de **XX** (00), **XX** (00), **XX** (00), **XX** (00) y **XX** (00), y confirmó a la SET que los respectivos timbrados fueron gestionados por un tercero de nombre **XX** (fs. 00/119 del Exp. N° 00).

En cuanto a los comprobantes supuestamente emitidos por **XX** (N° 00) y de **XX** (N° 00), el Sr. **XX**, propietario de la imprenta **XX**, mediante el Exp. N° 00 remitió a la SET los documentos de autorización de timbrado y confirmó a la SET que los respectivos timbrados fueron gestionados por **XX**, empleado de la empresa **XX**, a (fs. 00/138, 00 vto., 00, 00 vto. y 00 del Exp. N° 00).

Además, verificados los datos del Sistema Marangatu, **XX, XX, XX, XX, XX y XX**, registran llamativamente la misma dirección de correo electrónico **XX@HOTMAIL.COM**.

Es importante destacar también, que en los Estados Financieros Form. N° 00 presentados por estos supuestos proveedores, llamativamente se consignó en la casilla de los datos del Contador a los mismos contribuyentes que firman parte de este mismo esquema de emisión de facturas, tal y como consta en el cuadro de detalle adjunto al informe N° 00/2018 a fojas 18 del Exp. N° 00.

Otro elemento que el **DSR2** consideró para llegar a esta conclusión, fueron los informes remitidos por la **DNA**, ya que, de acuerdo a sus registros, ninguna de estas personas registran operaciones de despachos de importación de mercaderías (fs. 00/173 del Exp. N° 00). Igualmente, la **SENAVE** informó a la SET que estos contribuyentes no se encuentran inscriptos ni como proveedores, representantes, responsables técnicos, productores ni importadores (fs. 00/183 del Exp. N° 00). Además, verificados los datos del módulo Hechauka del Sistema Marangatu, se constató que estas personas tampoco realizaron adquisiciones locales de mercaderías (fs. 00/38 del Exp. N° 00).

Con relación a los supuestos proveedores **XX y XX**, el **DSR2** refirió que estas personas fueron investigadas en razón de que la SET había detectado un esquema de utilización de facturas relacionadas a operaciones inexistentes con el fin de generar créditos fiscales, costos y gastos ficticios, y en ese marco realizó la denuncia ante el Ministerio Público, generándose la Causa Fiscal N° 00/2016 caratulada: "*Investigación Fiscal S/Producción de documentos no auténticos*".

En ese sentido, respecto a **XX**, según consta en el Acta del 05/02/2016, los funcionarios de la **SET** verificaron que, en el domicilio declarado en el RUC, no reside la misma. (fs. 00 del Exp. N° 00) Además, al prestar su declaración ante el Ministerio Público, la Sra. **XX** indicó que no se inscribió como contribuyente y que se desempeña como empleada doméstica (fs. 00 del Exp. N° 00).

Además, el Sr. **XX (XX)**, en cuya imprenta se confeccionaron los comprobantes con Timbrado N° 00 a nombre de esta supuesta proveedora afirmó que los mismos no fueron solicitados ni retirados por la misma, sino que por un tercero de nombre **XX** (fs. 00/34 del Exp. N° 00).

En tanto que sobre **XX**, el **DSR2** constató que este contribuyente tampoco pudo proveer los bienes que supuestamente **NN** declaró que compró, porque según el Acta de Notificación del 04/05/2016 labrada por los auditores de la SET, que este ni siquiera reside en el domicilio declarado en el RUC, ni ha respondido a las llamadas realizadas al número de teléfono registrado en el Sistema Marangatu. Por otro lado, los funcionarios de la SET contactaron con el hermano del contribuyente, **XX**, quien manifestó que el Sr. **XX** reside desde hace aproximadamente 5 años en la República Argentina y que en Paraguay poseía un pequeño puesto de bebidas (fs. 00 del Exp. N° 00).

Pero, sobre todo, el **DSR2** refirió que **NN** no demostró que tales mercaderías hayan sido efectivamente adquiridas de estos proveedores, pues no presentó un solo documento que pueda respaldar ese hecho, a pesar de haber tenido la oportunidad de ejercer objetivamente su defensa durante el sumario administrativo. Por ejemplo, no presentó una sola orden de pago; orden de compra; nota de remisión u otros documentos legales u operativos que prueben la relación comercial, así como cada una de las operaciones que fueron que por montos considerables se registraron en cada factura, limitándose simplemente a impugnar cuestiones de forma.

Todas estas evidencias colectadas, permitieron al **DSR2** concluir válidamente que las operaciones de **XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX y XX** que **NN** pretendió hacer valer ante la Administración Tributaria jamás existieron, aun cuando los comprobantes reúnen los requisitos formales.

Por tanto, el **DSR2** concluyó que corresponde la desafectación de los créditos fiscales del IVA respaldados con los comprobantes de operaciones que no son reales, tal y como liquidaron los auditores de la SET.

Sin embargo, respecto al IRAGRO Régimen Contable, atendiendo que la finalidad de todo el proceso es determinar el impuesto de acuerdo a la realidad económica (Art. 247 de la Ley), el **DSR2** consideró que corresponde reliquidar este tributo sobre base mixta, conforme a lo dispuesto en el numeral 3) del Art. 211 de la Ley, y determinar el tributo de acuerdo a la rentabilidad promedio estimada del mismo sector al que pertenece el contribuyente.

Con tal propósito, el **DSR2** solicitó al Dpto. Asesoría Económica (**DAE**) los referidos índices, el cual informó que la rentabilidad promedio de las empresas del mismo sector correspondiente a los años 2014 y 2016 asciende al 26,0% y 25,7% respectivamente y con ello reliquidó el IRACIS, conforme al siguiente detalle:

OBLIGACIÓN	EJERCICIO FISCAL	COSTO IMPUGNADO	RENTABILIDAD BRECHA	% RENTABILIDAD FISCAL ESTIMADA	MONTO IMPONIBLE	IMPUESTO A INGRESAR
IRAGRO R.C.	2014	3.625.514.092	942.633.664	74,00%	1.273.829.276	127.382.928
IRAGRO R.C.	2016	3.636.336.363	934.538.445	74,30%	1.257.790.640	125.779.064
TOTAL		7.261.850.455	1.877.172.109	-	2.531.619.915	253.161.992

Respecto a la calificación de la conducta, **NN** alegó que *Mi parte niega categóricamente que haya procurado beneficiarse indebidamente con el crédito fiscal a que tiene derecho por las compras realizadas. No ha realizado acto, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra en perjuicio del fisco justificado o probado por la administración. No basta recurrir a las condiciones establecidas en la ley para atribuir la comisión de una conducta irregular o ilegítima de un contribuyente, es necesario probarla. Para actuar con dolo se tiene que probar que el contribuyente conocía que hacía algo prohibido...*

Al respecto, el **DSR2** señaló que, tal y como la propia firma expresó, el Art. 172 de la Ley claramente dispone que debe existir una conducta (acción u omisión) realizada por el contribuyente con el fin de provocar un engaño o perjuicio al Fisco, que en este caso está representado no solo por el monto de los tributos que no ingresó sino además por los créditos fiscales y los costos y gastos irreales que declaró, con el objeto de procurarse un beneficio indebido y no pagar los impuestos, pues mediante todas las pruebas alegadas en el expediente, resulta evidente que los supuestos proveedores no le realizaron venta alguna porque no tienen la capacidad para ello.

Por esta razón, la propia Ley establece que de confirmarse alguna de las presunciones establecidas en el Art. 173 del mismo cuerpo legal se comprueba que el actuar de sujeto pasivo fue con intención, y en el caso particular ha quedado plenamente demostrado que **NN** presentó sus declaraciones juradas con datos falsos, suministró informaciones inexactas sobre sus compras (numerales 3 y 5 del Art. 173 de la Ley) y que hizo valer ante la Administración Tributaria formas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados (numeral 12 del Art. 174 de la Ley), ya que declaró indebidamente a su favor compras a proveedores que no son reales. Por tanto, conforme a las evidencias obtenidas, quedó confirmado que se cumplen todos los presupuestos para calificar su conducta de acuerdo al tipo legal previsto en el Art. 172 de la Ley como Defraudación.

A fin de establecer la graduación de la sanción, el **DSR2** señaló que, si bien existieron circunstancias agravantes, destacó que para la aplicación de la sanción, es preciso considerar la finalidad de la misma, que además de la reparación del daño, debe ser lo suficientemente disuasiva para inducir al contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones, sin que ello signifique un sustancial menoscabo a su patrimonio, al punto de provocar el cierre o cese definitivo de actividades del infractor.

Por esta razón y en cumplimiento del Principio de Proporcionalidad, que faculta a la SET a determinar la cuantía de la sanción entre un mínimo y un máximo, el **DSR2** analizó las diferentes circunstancias y peculiaridades del caso, y consideró el hecho de que **NN** presentó los documentos que le fueron requeridos, los montos cuestionados fueron declarados en algunos periodos de dos ejercicios fiscales de un ejercicio y que dichos montos corresponden a un porcentaje medianamente relevante del total de sus compras.

Consecuentemente, el **DSR2** consideró que corresponde la aplicación de una multa del 130% sobre los tributos defraudados, de acuerdo a lo previsto en el Art. 175 de la Ley, sobre los créditos fiscales cuestionados en el IVA. En cuanto al IRAGRO, dicha sanción será aplicada sobre el tributo determinado, en atención a que la misma grava las utilidades y no los ingresos brutos, a lo que cabe agregar que el IVA crédito fiscal no constituye costo ni gasto en la liquidación del citado impuesto.

Con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas anteriormente, el **DRS2** concluyó que corresponde determinar las obligaciones fiscales en concepto de los impuestos y aplicar la multa.

POR TANTO, en uso de las facultades legales

EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN RESUELVE

Art. 1: Determinar la obligación fiscal del contribuyente **NN** con RUC 00, conforme a las razones expuestas en el Considerando de la presente Resolución de acuerdo al siguiente detalle:

Obligacion	Periodo	Impuesto	Multa	Total
521 - AJUSTE IVA	02/2014	7.069.002	14.542.834	21.611.836
521 - AJUSTE IVA	03/2014	0	98.376.614	98.376.614
521 - AJUSTE IVA	05/2014	0	152.747.632	152.747.632
521 - AJUSTE IVA	06/2014	0	195.826.350	195.826.350
521 - AJUSTE IVA	01/2016	0	78.788.480	78.788.480
521 - AJUSTE IVA	02/2016	0	74.204.809	74.204.809
521 - AJUSTE IVA	03/2016	0	99.966.910	99.966.910
521 - AJUSTE IVA	04/2016	0	74.680.722	74.680.722
521 - AJUSTE IVA	05/2016	0	83.119.305	83.119.305
521 - AJUSTE IVA	06/2016	0	61.963.500	61.963.500
516 - AJUSTE IRAGRO	2014	127.382.928	165.597.806	292.980.734
516 - AJUSTE IRAGRO	2016	125.779.064	163.512.783	289.291.847
Totales		260.230.994	1.263.327.745	1.523.558.739

Art. 2º. - CALIFICAR la conducta del contribuyente **NN** con **RUC 00** conforme a lo establecido en el Art. 172 de la Ley 125/1991; y **SANCIONAR** al mismo con la aplicación de una multa equivalente al 130% sobre los tributos defraudados, conforme a las razones expuestas en el Considerando de la presente Resolución.

Art. 3º: NOTIFICAR al contribuyente conforme a la RG N° 114/2017, a fin de que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución, bajo apercibimiento de Ley.

Art. 4º: COMUNICAR al sumariado que podrá interponer recurso de reconsideración en sede administrativa, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, computado a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la presente resolución, conforme al Art. 234 de la Ley N° 125/1991 (TA) y a la RG N° 114/2017.

Art. 5º: INFORMAR lo resuelto a la Dirección General de Recaudación y de Oficinas Regionales, a fin de que tome conocimiento de los términos de la presente Resolución, y cumplido archivar.

ÓSCAR ORUÉ
VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN